

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciocho (18) de Diciembre de dos mil veintitrés (2023)

En el proceso ordinario laboral promovido por **LUIS GONZALO CANO LARREA** contra ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES PROTECCIÓN S.A. Y COLPENSIONES, como litisconsorcio necesario NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES, procede la Sala Segunda de Decisión Laboral a estudiar la viabilidad de conceder el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante y la demandada PROTECCIÓN S.A.

La parte demandante solicita se DECLARE la nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual, realizada a la sociedad PROTECCIÓN S.A., porque el traslado obedeció a un vicio en el consentimiento en el cual se indujo al demandante; se declare que el demandante permanece afiliado sin solución de continuidad al Régimen de Prima Media.

Surtido el trámite de primera instancia, a través de Sentencia de primera instancia, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIÓ a la sociedad PROTECCIÓN S.A. y a Colpensiones de las pretensiones de la demanda. No condenó en costas.

Esta Sala de Decisión Laboral, al resolver **REVOCO PARCIALMENTE** la Sentencia de primera instancia, para en su lugar CONDENAR a PROTECCIÓN S.A a reconocer y pagar al Sr. Luis Gonzalo Cano Larrea la suma de \$13.931.428 por concepto de indemnización de perjuicios consolidados, causa desde el 1º de septiembre de 2016 al 31 de enero de 2023.

Y como indemnización de perjuicios futuros, a partir del 1º de febrero de 2023, PROTECCIÓN S.A. deberá pagar al demandante la suma de \$103.398 mensuales por concepto de diferencia del valor de las mesadas pensionales, a título de indemnización de perjuicios, valor que deberá ser actualizado anualmente conforme al incremento legal que corresponda al IPC.

Y del mayor valor de las mesadas pensionales que la sociedad PROTECCIÓN S.A. deberá pagar a título de indemnización de perjuicios consolidado e indemnización de perjuicios futuros, DESCONTAR lo que hubiera correspondido a descuentos en salud, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A. al reconocimiento y pago de la indexación de la condena impuesta, teniendo como índice inicial el 1º de septiembre de 2016 y como índice final el IPC del momento del pago de la obligación.

CONFIRMÓ en lo demás la sentencia de primera instancia.

Procede el recurso en los procesos ordinarios laborales, a voces del artículo 86 del C.S.T y de la SS, cuando la cuantía del interés jurídico económico sea superior a 120 SMLMV.

Pues bien, es criterio reiterado por la jurisprudencia del Trabajo, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, se traduce en el monto que representa la desmejora de sus intereses por la modificación efectuada en la sentencia de segunda instancia, o en las cuantías de las pretensiones que hubieren sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado (**ver al respecto** proveído CSJ **AL5290-2016, radicación 74170 del 17 de agosto de 2016 y AL1376 de 2019, radicación 83374 del 6 de marzo de 2019, entre otros**).

Ahora bien, primero se analizará el interés jurídico económico de la parte demandante, en lo relacionado a las pretensiones negadas, por tanto, en cuanto a pensión de Vejez por el Decreto 758 de 1990, se reliquido en esos términos, pero a cargo de PROTECCIÓN S.A, concedida la misma, no se evidencia interés jurídico.

Referente a la pretensión ineficacia del traslado, consiste e en una obligación de hacer. Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha adoctrinado que no es posible cuantificar el interés jurídico en estos casos, ya que este tipo de obligaciones no son determinables en dinero, como indicó en providencia AL5533-2019 del 4 de diciembre de 2019, MP. Jorge Luis Quiroz Alemán, donde consagró que:

*“...Así mismo, tiene adoctrinado la Sala, que la suma gravaminis debe ser determinada o, al menos, determinable en dinero, es decir, cuantificable pecuniariamente tal como se ha dicho, entre muchas otras en CSJ AL4364-2014 y CSJ AL1340-2014; en esta última se consignó:*

*[...]*

*En ese orden de ideas, cuando es la parte demandada, la que procura la casación del fallo del Tribunal, dicho interés económico se cuantifica única y exclusivamente con las condenas que de manera expresa le hayan sido aplicadas, determinadas o determinables en dinero, es decir, cuantificables pecuniariamente y no otras supuestas o hipotéticas que crea encontrar en la sentencia contra la que se intenta recurrir en casación.*

*[...]*

*En el caso bajo estudio, advierte la Sala, que le asiste razón al Tribunal cuando señala que las condenas impuestas en el fallo cuya revisión se persigue, son eminentemente obligación de hacer, lo que implica que no es cuantificable pecuniariamente, pues la sentencia de primer grado que fue confirmada íntegramente por el ad quem, se limitó a declarar dicha orden frente a la reapertura de la cuenta individual de pensión del actor.*

*Así las cosas, en virtud de que la sentencia emitida por el juez de segundo grado, no contiene erogación alguna cuantificable pecuniariamente que perjudique a la parte que recurre, se declarará bien denegado el recurso de casación por parte del Tribunal...”.*

Lo anterior indica que carece de interés la parte recurrente para que el proceso sea revisado por la Honorable Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral de Casación.

Como segundo, el interés jurídico de PROTECCIÓN SA. Se traduce a las condenas que lo perjudiquen, es decir la indemnización por perjuicios consolidados por valor de \$13.931.428, la diferencia del valor de las mesadas pensionales en la suma de \$103.398 por vida probable (16) por 13 mesadas arrojando como resultado \$21.506.784, actualizada a la fecha por \$1.137.378, para un total \$36.575.590, cifra que no supera la cuantía.

En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, **NO CONCEDE**, el recurso de casación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación, interpuesto por la parte demandante y la demanda PROTECCIÓN SA., contra el fallo proferido, una vez ejecutoriado, ordénese la devolución al juzgado de origen.

Lo resuelto se ordena notificar en anotación por ESTADOS.

Los magistrados,



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**  
**MAGISTRADO**



**JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS**  
**MAGISTRADO**

Sin firma por ausencia justificada  
**CARMEN HELENA CASTAÑO CARMONA**  
**MAGISTRADA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA  
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 218 del 19 de  
diciembre de diciembre de 2023

**consultable aquí:**  
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>